Dosier de prensa

10/02/2023 – 16/02/2023

VNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Facultat d'Economia

DEPARTAMENT D'ANÀLISI ECONÒMICA

NOTICIAS

Viernes, 10 de febrero

Rafael Doménech

Luces y sombras de la subida del SMI, *Expansión* (PDF).

Santiago Carbó

“En una sociedad con tanta desigualdad, yo vigilaría mucho mi remuneración si fuera el presidente de una gran compañía”, *el Periódico de España* (PDF).

Juan Fernández de Guevara

Más de 26.200 empresas cerraron en España en 2022, cifra más alta desde 1995. *ElDiario.es, EFE* (enlace).

Sábado, 11 de febrero 2023

Santiago Carbó

Un año negro para las empresas españolas, *El Correo de Andalucía* (enlace).

Santiago Carbó

Galicia tiene casi tantos hogares alquilados como hipotecas por el auge en rentas altas, *La Opinión A Coruña* (PDF).

Juan Fernández de Guevara

Un año negro para las empresas españolas, *El Correo de Andalucía* (enlace).

Domingo, 12 de febrero 2023

Rafael Doménech

Europa discute cómo se jubilan sus ciudadanos, *El País* (PDF).

Santiago Carbó

“Los jóvenes no tienen un problema de acceso financiero a la vivienda”, *Levante* (enlace).

Matilde Mas

La eficiencia “más allá del PIB”, *El País* (PDF).

Martes, 14 de febrero 2023

José Manuel Pastor

Talento, cooperación y sostenibilidad, retos de la industria aeronáutica y aeroespacial gallega, *Economía en Galicia.com* (enlace)

Miércoles, 15 de febrero 2023

Javier Ferri

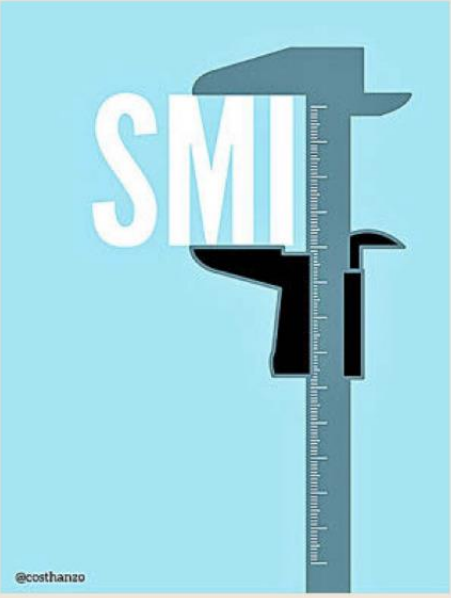
La inflación repunta dos décimas, hasta el 5,9%, en el primer mes de rebaja del IVA de los alimentos, *La Vanguardia* (enlace)

Luces y sombras de la subida del SMI

Rafael Doménech y Juan Ramón García

Los aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) son una excelente noticia en economías en las que crece la productividad y las tasas de empleo son elevadas. Pero la productividad por ocupado ha disminuido desde 2019 y el PIB por hora trabajada no había alcanzado a finales del pasado año los niveles prepandemia. Con datos de la Comisión Europea, la productividad por hora trabajada de España en 2022 estaba un 17,9% por debajo de la media de la UE. La tasa de empleo de nuestro país es la cuarta más baja de la UE, después de Grecia, Italia y Rumania, y la tasa de desempleo se sitúa en el 13%, un nivel inaceptablemente elevado, la más alta de la UE.

¿Significa esto que, dadas las circunstancias actuales de la economía española, el SMI no debería crecer? Puede hacerlo igual que el resto de salarios, para que mantenga su relación con el salario medio, o incluso aumentar más si se quiere alcanzar un determinado objetivo de política social y de rentas (por ejemplo, el 60% del salario medio o mediano). Pero hay que ser conscientes de los costes y los beneficios de la medida, que lamentablemente siguen sin ser evaluados con el detalle y el alcance que se merece. Tan perjudicial para la economía y para los trabajadores potencialmente afectados puede ser un salario mínimo excesivamente reducido como uno demasiado elevado.



Tan perjudicial puede ser un salario mínimo excesivamente reducido como uno que sea demasiado elevado

Los beneficios de la subida para este año son obvios. En la actual situación inflacionaria, los ocupados que mantengan su empleo y continúen trabajando el mismo número de horas conservarán su poder adquisitivo. En la medida en que el salario medio aumenta menos, la subida del 8% del SMI acerca a España a las recomendaciones de la directiva 2022/2041 de la UE (60% de la mediana salarial bruta y el 50% del salario medio bruto). Debe tenerse en cuenta que el año pasado el SMI en paridad de poder de compra superó en más de un 10% el promedio de los restantes países de la UE con salario mínimo nacional. También hay evidencia de que los incrementos del SMI han tenido efectos positivos sobre la desigualdad salarial. Respecto al argumento de que el salario mínimo puede ser una herramienta para combatir el monopsonio de algunas empresas en determinados territorios, parece más apropiado utilizar políticas de competencia más focalizadas y específicas que una de carácter nacional y general como el salario mínimo.

Efectos de segunda ronda

Por el lado de los costes, no se han evaluado todos los efectos de los aumentos anteriores sobre el empleo de los colectivos más vulnerables y menos productivos, su intensidad en número de horas trabajadas, la renta disponible de los hogares y la desigualdad de ingresos. Como en años anteriores, con la subida de este año seguimos un poco a ciegas. En muchas provincias y sectores, el salario mínimo excede ya el 60% del salario mediano bruto, y tampoco sabemos en qué medida se convierte en un lastre para la cohesión territorial. La evidencia apunta a que en las regiones donde el SMI es mayor en relación con el salario medio, la tasa de desempleo también es más elevada. Adicionalmente, en el contexto actual de alta inflación, el incremento del SMI (que afecta potencialmente a más de un 12% de trabajadores) podría contribuir de manera directa con un 1% más de inflación salarial, lo que añade presión sobre el crecimiento de los precios y aumenta la probabilidad de efectos de segunda ronda y de que la inflación se enquiste.

Desde hace años defendemos que las decisiones sobre el salario mínimo deberían satisfacer tres principios. Primero, ser el resultado de un acuerdo tripartito entre sindicatos, organizaciones empresariales y Gobierno; éste al ser responsable de las políticas activas de empleo y otras medidas de rentas, como los complementos salariales. Segundo, ser predecibles. En la medida de lo posible, es preferible negociar una senda plurianual que reduzca la incertidumbre. Y tercero, ser diseñadas y evaluadas continuamente por una comisión independiente similar a la de algunos países europeos.

BBVA Research

PRENSA IBÉRICA

SEMANA DEL 6 AL 12 DE FEBRERO

activos
LA ECONOMÍA QUE TRANSFORMA

Santiago Carbó: «El impuesto a la banca en España es un palo en la rueda»

| P. 8 y 9

LUFE, el 'Ikea vasco' que nace de una quiebra

P. 13

Las entidades financieras destierran las cartillas

| P. 17

La industria quiere ganar con la internet de las cosas

En dos años, los dispositivos interconectados han pasado de 10.000 a 40.000 millones. El 91,5% de las empresas creen imprescindible esta tecnología para su éxito.

P. 20

Todos contra Mercadona

Los grupos alemanes Lidl y Aldi tratan de pisarle los talones a la **cadena de Juan Roig**, líder destacado del mercado en España. También El Corte Inglés, Carrefour y Eroski, entre otros. Con una inflación disparada, aquí la guerra se centra en los precios | P. 4 a 6

Santiago Carbó

Nacido en Gandia en 1966, Carbó es catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València, director de estudios financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). El economista defiende la puesta en marcha de una política de vivienda desde el sector público y critica que los jubilados no hayan contribuido a la moderación de los salarios con la subida de sus pensiones en un 8,5 %.

«Los jóvenes no tienen un problema de acceso financiero a la vivienda»

Jordi Cuenca
València

—Durante meses, se ha vaticinado un 2023 de recesión. Las previsiones y los datos ahora no apuntan en esa dirección. ¿Cómo se explica este cambio?

— Preveíamos una recesión técnica, no tanto en España, que nunca estuvo confirmada, pero sí en Alemania o Estados Unidos, y de repente hemos cambiado a una situación en la que la recesión parece que no se va a producir en los próximos trimestres. Eso no significa que un poco más adelante se produzca. Realmente, la desaceleración de la economía no ha sido tan fuerte y no ha dado lugar a dos trimestres de crecimiento negativo del PIB. ¿Por qué? Hay ciertas inercias, las medidas que están tomando los gobiernos hacen que la economía no se esté derrumbando del todo, el ahorro de la época del covid que aún parece que está funcionando... Dos matices. Uno, a pesar del debilitamiento de la economía, esta vez no va a haber un impacto en el mercado de trabajo, más bien se va a seguir creando empleo. ¿Por qué? Quizás porque tenga unas características en su funcionamiento que hacen más fácil que se pueda crear empleo y quizás porque se está produciendo una cierta renovación generacional que no aprecian las estadísticas en muchos casos, es decir se está jubilando mucha gente y viene en su lugar gente con nuevas capacidades. Creo también que tenemos un problema en el cálculo del PIB. Hay algo que no estemos recogiendo y ahí puede estar el problema. El PIB no refleja la realidad. Las actividades digitales e intangibles probablemente no estarán bien recogidas. Sobre las actividades digitales no tenemos muchas veces ni impuestos sobre ellas. Sorprende que el mercado de trabajo esté resistiendo relativamente bien y la economía no crezca tanto. Hay algo que no concuerda.

—De todas formas, visto el estrés al que el covid y la inflación han sometido a la economía española en los tres últimos años, habrá que concluir que tenía bases sólidas. ¿O no?

— La economía española sigue teniendo muchos retos. Su capacidad de resistencia es mayor hoy que hace 15 años con la crisis global porque no tenemos tanta dependencia de la promoción inmobiliaria, de la construcción, y eso es una buena noticia, porque no son bienes comercializables. Ahí no compites. Donde hay que mirar es si hemos aumentado la competitividad y ahí sí que hay relativamente buenas noticias porque, a pesar de todo, no hemos perdido cuota en el comercio mundial. Las empresas españolas están resistiendo. Dicho esto, tenemos retos. La productividad no aumenta al ritmo que todos deseamos. Además, tenemos una espada de Damocles, que son las cuentas públicas. Hay confianza por ahora de los inversores. La economía española, como muchas otras, se encuentra en los próximos años en una encrucijada. Tenemos cosas prometedoras, como las renovables, que hay que aprovechar. El hidrógeno, en el que España va a jugar un papel determinante. Pero tenemos el problema de acceso de las nuevas generaciones a la vivienda, salarios peores de los que tenemos más edad.

—La inflación subyacente no acaba de corregirse y los precios de los alimentos siguen disparados. ¿Por qué?

— La subyacente lo que está reflejando es que el *shock* inicial del precio de la energía ha ido expandiéndose a los alimentos que se transportan, las materias primas, los chips... Podemos decir que este cáncer se ha extendido al conjunto de la economía y va a costar rebajarlo. Aquí, el papel del Banco Central Europeo es esencial porque puede ayudar a enfriar la economía. Es necesario. No queremos que se rompa el mercado de trabajo, pero es evidente que con un crédito al cero por ciento había empresas y familias que estaban gastando cuando no debían. Eso hay que enfriarlo, porque, si no, no hay manera de bajar la inflación. La subyacente debe empezar a bajar cuando las tuercas del BCE se vayan atornillando. Si no es así, tenemos un problema porque podemos estar causando una recesión más adelante sin la inflación controlada. Un segundo elemento de riesgo es que empecemos con la espiral de salarios. Los productos básicos están teniendo una gran volatilidad. Inicialmente, afectó a todo lo que venía de Ucrania y Rusia, como los cereales, pero están teniendo una gran volatilidad y habrá que analizar porqué se encarecen tanto las cadenas de compras desde el agricultor. Hay momentos en que la energía no aumenta tanto, el petróleo baja, y no se ha reflejado tanto. No hay restricciones de producto que lo encarezcan.

> «El mercado está a ver quién es el nuevo Reino Unido; no compra una bajada de impuestos general»

> «En una sociedad con tanta desigualdad, yo vigilaría mucho mi remuneración si fuera el presidente de una gran compañía»

—Si no es por culpa de la energía, ni de los precios que cobran los agricultores, habrá que dirigir la mirada hacia la distribución.

— La distribución en este momento está bajo escrutinio de todos. Procedería tener más información para saber porqué se está encareciendo, siendo conscientes de que son productos muy volátiles que pueden verse afectados por cualquier cosa que ocurra de repente y que tenga un efecto contagio al conjunto de los productos hortofrutícolas.

—Los precios suben de forma irreversible, pero los salarios no les acompañan, con lo que los españoles están perdiendo poder adquisitivo, sobre todo los que tienen menores ingresos. ¿Qué hay que hacer?

— Bajar la inflación sería una medida clarísima intentando alterar en la menor medida posible la economía, es decir, no entrando en recesión y con pérdida de empleo. Esa es la gran medida. Dicho esto, los gobiernos han decidido tomar medidas paliativas, que podemos comprender pero a veces no son correctas. Por ejemplo, han bajado los salarios, pero tenemos un montón de subsidios para el transporte, para muchas cosas. Hace poco estuve en Nueva Orleans en un foro económico y decían que hoy día la espiral que tenemos no es salarios/precios sino subsidios/precios. Están siendo los gobiernos con sus políticas fiscales expansivas los que están manteniendo la demanda y haciendo que la gente lo note menos. Esto no puede permanecer mucho tiempo, porque es un equilibrio difícil y débil. Si no bajamos la inflación, será muy difícil en el próximo otoño parar subidas mayores de salarios en los convenios.

—¿Cuando pase este periodo de alta inflación, el problema será la deuda?

— La deuda al nivel actual me preocupa, pero me preocupa más el déficit público de todos los años. Esa deuda es asumible si España crece y deja de tener déficits estructurales, corrige la situación de su sistema de pensiones, empieza a tener un sistema

Santiago Carbó, en la Facultad de Economía de la Universitat de València. | J.M. López

fiscal suficiente para lo que quiere gastar. No me gustaría que llegara ese debate otra vez por la tensión en el mercado de deuda. Por ahora ha estado muy tranquilo. Me preocupa la agenda electoral porque el mercado puede estar nervioso. Ahí podemos tener un episodio de más tensión y a lo mejor los socios, si generamos mucha tensión, nos acaban diciendo: 'Oiga, usted, empiece a vigilar su déficit público'. La deuda no va a pesar tanto si se hacen determinadas reformas y la economía funciona. El déficit es el gran problema y habrá un momento en que habrá que pensar en aumentar los impuestos o al menos su capacidad recaudatoria. Nuestros impuestos no son de los más altos.

—Pues empresarios y la derecha política abogan por reducir impuestos y así los números públicos no salen.

— En general, esa es una opción que Europa no va a aceptar y el mercado tendría muchas dudas, como hemos visto con el Reino Unido. No puedes alterar radicalmente la fiscalidad al núcleo de personas que ganan entre 25.000 y 100.000 euros, porque te cargas el sistema tributario, la recaudación. La experiencia del Reino Unido con Liz Truss muestra que hay que tener mucho cuidado. Sería muy importante que seamos conscientes de que el mercado espera que alguien más se pegue un batacazo haciendo algo como esto. El mercado está a ver quién es el nuevo Reino Unido. Es una tentación, la de bajar impuestos, porque es una cuestión simpática para todos, pero en estos momentos el mercado no compra bajadas de impuestos generales.

—¿Qué escenario maneja respecto de los tipos de interés para este año?

— Creo que el BCE se puede quedar en torno al 4%. Creo que el euríbor va a superar el 4%, pero con una inflación del cuatro en términos reales no es una carga tan grande.

—La banca se resiste a impuestos específicos al tiempo que la Autoridad Bancaria Europea la señala por incrementar de forma significativa los millonarios sueldos de los banqueros. ¿Qué opina al respecto?

— En este tema hay bastante demagogia. La banca es percibida en la sociedad en muchas ocasiones como unas empresas que ganan muchísimo dinero y con una pequeña investigación sobre ellas se sabe que no. No solo por los tipos, sino porque han tenido que hacer una reestructuración. Han vivido una situación muy compleja al tener que trabajar con estos márgenes. Y lo ha reflejado su valoración bursátil. En este momento, están bastante por debajo de su valor en libros. Además, se trata de un sector al que le espera bastante transformación y reestructuración, porque estamos en una sociedad cambiante, con nuevos canales de distribución, con unos reguladores que imponen que sean más eficientes, y eso significa quitar personal y cerrar oficinas, con tensiones en la otra punta, porque los clientes no ven el servicio y se enfadan. Creo que ese impuesto no estaba suficientemente fundamentado y, desde luego, para los bancos globales españoles que tienen que competir con bancos de otros países, es un palo en la rueda. En cuanto a las remuneraciones, a cada uno le pueden gustar más o menos las de los banqueros, pero hay unas juntas de accionistas que son las que deciden, que también penalizan cuando no están satisfechas. No me parece oportuno poner topes. Otra cosa es lo que me parezca éticamente. En una sociedad con tantas desigualdades, yo vigilaría mucho mi remuneración si fuera el presidente de una gran compañía.

—Al principio del covid vimos alguna operación corporativa, como la de Bankia y CaixaBank, y alguna otra fracasada como la de BBVA y Sabadell. Desde entonces, las fusiones parecen haber quedado en suspenso. ¿Volverán los movimientos?

— En el momento en que se vuelva a unos tipos normalizados, pueden volver a aparecer las dificultades y las necesidades para crecer. Ahora va a ser más difícil en este contexto. Cuando pasen estas turbulencias, volveremos a recalibrar si hacen falta fusiones, porque igual no todos los bancos estén en situación de resistir el nuevo entorno cada vez más digital y competitivo.

—El acceso a la vivienda se ha vuelto casi un imposible, sobre todo para los jóvenes, por sus salarios, por los precios de los inmuebles y por las dificultades para lograr el dinero para una entrada ahora que la banca ya no financia el 100% del crédito. ¿Deberían los bancos abrir la mano?

— Los préstamos que dan más del 80% del dinero son arriesgados, sean de jóvenes o de mayores. Generan un problema, porque significan que quien no tiene un pequeño ahorro no tiene fácil acceso a la vivienda. Dicho esto, hay que decir que comprar una vivienda no puede ser todo a deuda. A lo mejor hay que buscar determinadas soluciones para los jóvenes, que no creo que tengan un problema de acceso a la vivienda financiero, lo que tienen es una vivienda que se les resiste por todos los sitios. Comprar es carísimo, alquilar también. Es un problema muy serio. Lo que hay que hacer es aumentar la oferta para bajar los precios. Poner topes al precio no funciona nunca. Lo que funciona es aumentar el número de viviendas. ¿Cómo? Política de vivienda no hay en España. Hubo en los noventa, pero no la hemos vuelto a retomar. No le ha interesado a ningún Gobierno. Es costosa pero se puede hacer acompañado del sector privado para viviendas sociales. Hay que abrir ese debate. Tenemos un montón de viviendas desocupadas, algunas de la Sareb. Se pueden crear nuevas. Las autonomías que sean capaces de desarrollar una política de vivienda van a tener un factor a su favor.

—¿Que hacemos con las pensiones? ¿Habrá que dificultar su acceso?

— Dificultar su acceso, no. Para las contributivas, hay que hacer cálculos más basados en lo actuarial que en la política. Es decir, los datos. Si vivimos de media hasta los noventa, hay que calcularlo también y acompañarlo de determinadas medidas. Por ejemplo, no pueden crecer como este año un 8,5%. Primero porque lo hemos sacado del pacto de rentas. Les ajustamos los salarios a todos, incluso a los funcionarios, aunque sea a tres años, y a los pensionistas, no. Puedo entenderlo en una pensión de mil euros, pero en una de tres mil euros... Eso no significa que no aumenten, pero sí que en determinado momento tengan que contribuir igual que otros colectivos. Hay que potenciar las medidas privadas de ahorro. Apoyar los planes individuales y no solo los de empresa.

La Opinión
Sábado, 11 de febrero de 2023

Galicia tiene casi tantos hogares alquilados como hipotecas por el auge en rentas altas

Las familias que ganan más de 2.500 euros se convierten en el grupo mayoritario en los arrendamientos ▶ El alza récord del 4,8% en 2022 sitúa el precio medio en 472 euros

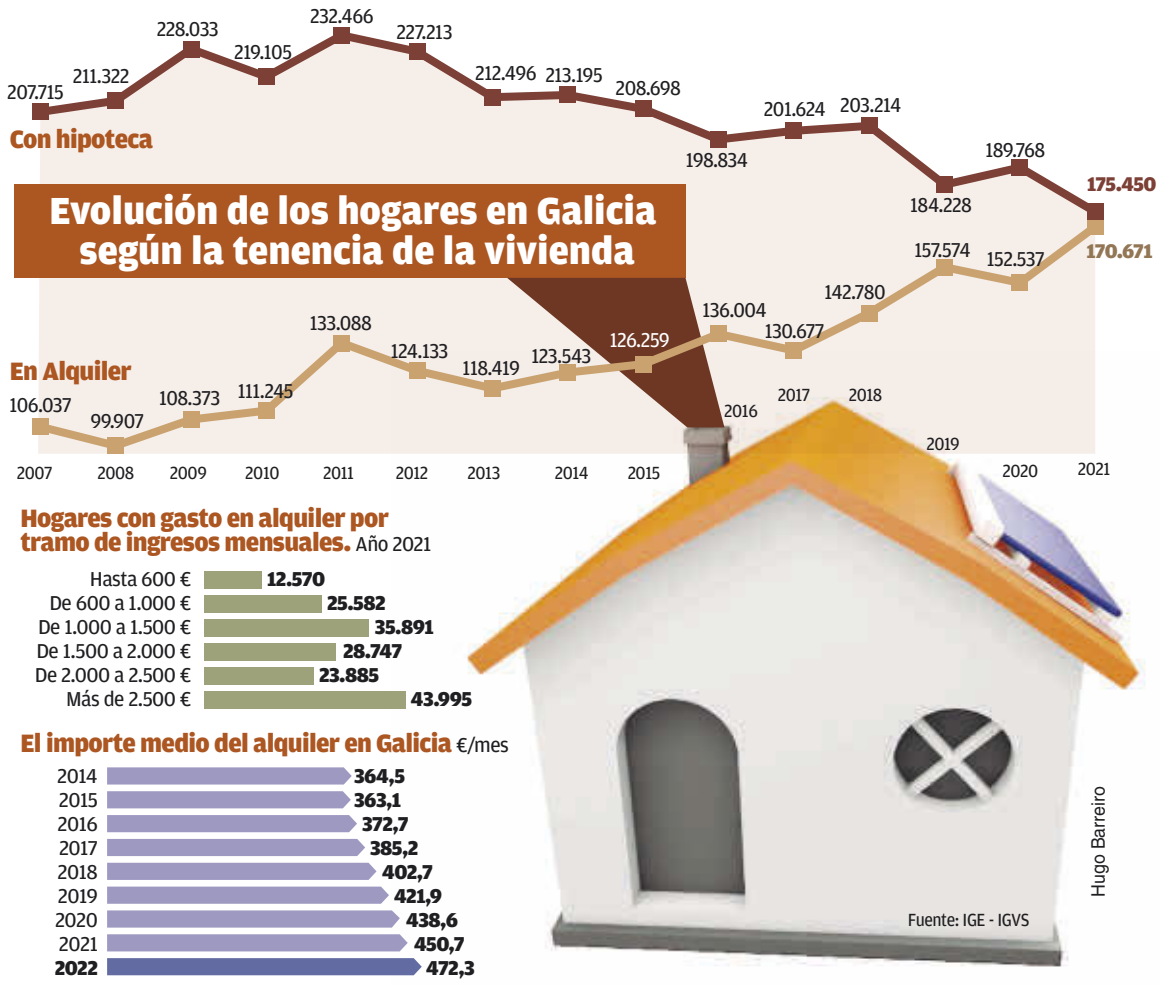
JULIO PÉREZ
A CORUÑA

A diferencia de otros sectores, el *shock* provocado por la pandemia en la construcción no duró mucho más que el confinamiento. Cuando las actividades no esenciales se reabrieron tras los festivos de Semana Santa en abril de 2020, el ladrillo volvió a la carga, con mejores expectativas incluso por la demanda alborotada de aquellos que pudieron blindar sus ingresos y querían el cambio a una vivienda mejor tras las durísimas semanas de encierro para contener la primera ola del COVID-19. "Una primera apreciación es que tanto las operaciones como los préstamos están volviendo a los niveles anteriores, aunque aún quede cierto recorrido para esa recuperación", apuntaban los economistas Santiago Carbó y Francisco Rodríguez Fernández en un informe sobre el mercado residencial publicado por Funcas en julio de 2021. Efectivamente, tanto las transacciones como los préstamos para la compra de inmuebles pisaron el acelerador y se mueven en las mejores cifras desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Una parte importante de las compras claramente tenía un objetivo inversor para aprovechar el auge del alquiler y su suculenta rentabilidad como alternativa a la raquítica remuneración de los depósitos durante el largo periodo de tipos de interés negativos. ¿La crisis del coronavirus afectó a los arrendamientos? Sí, pero básicamente por la imposibilidad de salir a la calle en aquel momento. Los contratos y los precios no dejaron de crecer en Galicia, animados por un nuevo perfil de cliente con ingresos elevados que antes se hubiera decantado por firmar un crédito.

En la comunidad hay prácticamente lo mismo de lo uno que de lo otro. El número de hogares que estaban pagando una hipoteca en 2021 rondaba los 175.400. Los que optaban por alquilar superaban los 170.600. La tendencia es muy diferente entre las dos modalidades de tenencia de vivienda. Las familias hipotecadas en Galicia se redujeron un 7,5% en comparación con 2020 y los arrendamientos aumentaron cerca del 12%, según el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Entre las razones que ya antes de la pandemia el Banco de España daba para el bum del alquiler en un profundo análisis en 2019 estaban "las dificultades de los colectivos con menor renta" para mejorar sus ingresos por la todavía elevada incidencia del paro, la también alta tasa de temporalidad y parcialidad en los jóvenes y la población inmigrante y la caída de la cuantía concedida por los bancos sobre el valor total de la vivienda, huyendo de los excesos que abrieron la espita de la doble recesión financiera entre 2008 y 2013. Durante mucho tiempo, los hogares con ingresos de entre 1.000 y 1.500 euros al mes formaron el grupo mayoritario de los arrendamientos en Galicia, seguidos de las familias con entre 600 y 1.000 euros. Pero el progresivo cambio de mentalidad sobre la propiedad y la movilidad laboral en puestos mejor remunerados dan un vuelco a la situación. Los hogares que ganan más de 2.500 euros ocuparon ese lugar en 2021: casi 44.000, un 47% más que el ejercicio anterior. En los intervalos de menor renta —entre 600 y 1.000 euros—, los hogares en arrendamiento mermaron alrededor de un 14%, unos 6.500 menos.

El encarecimiento sin descanso de los precios se ha convertido en una barrera para los colectivos más vulnerables —hay 42.000 familias que destinan más del 30% de su presupuesto al alquiler, el límite de esfuerzo recomendado—, mientras que la creciente demanda de las personas con más recursos ayuda a recalentar el mercado. De hecho, los contratos con mensualidades superiores a los 1.000 euros no dejan de crecer en la comunidad: 34 en 2014 y casi 400 en 2022. Lo mismo está pasando en los de 700, 800 o 900 euros. La cuantía media se situó en 472 euros el año pasado, según el informe que acaba de divulgar el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), tras un alza récord del 4,8% respecto a 2021.



Las ventas en la comunidad tocan máximos en 12 años

Galicia fue la tercera comunidad en la que más aumentaron las compraventas de viviendas en noviembre del pasado año. Se comercializaron 1.994 inmuebles, un 15% más que en el mismo mes de 2021, según el balance del Instituto Nacional de Estadística (INE). A la espera de los datos de diciembre, se superaron ya las cifras de ejercicio anterior al completo: 19.980, el mejor dato para el mercado desde 2010.

En toda España, el número de operaciones se incrementó en noviembre de 2022 un 10,8 %, el mayor aumento que se registra en este mes desde 2007, y sumó 55.132 operaciones. La compraventa de viviendas encadenó 21 meses de subidas y un crecimiento del 17% a falta de un mes para conocer el dato de cierre de 2022, marcado en los últimos meses por el encarecimiento de los tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista. Con respecto al mes anterior, octubre, las compraventas de vivienda subieron un 6,8 %.

El PP apoya como candidata en Boimorto a la alcaldesa a la que expulsó por colarse en la vacuna del COVID

Rueda admite el "error" que Novo cometió y que ella misma reconoció en su momento, pero dice respetar "la propuesta" de la dirección provincial en A Coruña

REDACCIÓN
A CORUÑA

La alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo, quien pidió la baja en el PPdeG, aunque se mantuvo en el cargo, tras su polémica vacunación de la primera dosis del COVID en una residencia de mayores de titularidad municipal, será la candidata de los populares en la localidad en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Fuentes de la dirección provincial confirmaron ayer que Novo no ha vuelto a afiliarse y concurrirá como independiente, informa Europa Press.

La apuesta del PP por Novo para intentar mantener la Alcaldía de Boimorto la avanzó ayer *elDiario.es*. A pesar de la polémica Novo se ha mantenido como cabeza del gobierno local del municipio, después de una votación en pleno, en la que los concejales populares votaron para mantenerla como regidora. En su día, dejó las filas del PPdeG, lo que propició que se cerrase un expediente disciplinario que había decidido abrirle el partido que entonces encabezaba Alberto Núñez Feijóo. La apertura del expediente fue casi inmediata tras la información que reveló que la regidora se había vacunado en la residencia de titularidad municipal el 28 de diciembre de 2020, un día después de que la primera gallega en recibir una dosis frente al COVID hiciese lo propio en Santiago.

María Jesús Novo. // L. O.

A preguntas de los medios ayer en Santiago, el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha alegado este viernes que se trata de una propuesta de la formación provincial coruñesa, que dirige el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, y que él "respeta". Rueda ha admitido que "en su momento, en aquel contexto", el paso dado por la alcaldesa "creó polémica". "Creo que ella reconoció su error", ha incidido. "Ahora el PP en la provincia de A Coruña hace esa propuesta y creo que, reconociendo el error que tuvo, si esa es la propuesta del PP de A Coruña yo la voy a respetar", zanjó.

ESTADÍSTICAS

MATILDE MAS

La eficiencia "más allá del PIB"

MARAVILLAS DELGADO

El informe *Measurement of Economic Performance and Social Progress,* dirigido por Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009), propone sustituir, o complementar, las estadísticas tradicionales —centradas en el PIB— por lo que de verdad importa, el bienestar presente y futuro de los ciudadanos, compartiendo, en cierta forma, la opinión más radical de Robert Kennedy: "El PIB lo mide todo, excepto lo que hace que la vida valga la pena".

La expresión "más allá del PIB" resume la propuesta de sustituir este indicador por otra medida más próxima a la idea de bienestar. Ambas hacen uso de recursos para obtener unos resultados: trabajo y capital en el caso de la renta y una gran variedad de factores en el del bienestar. Pero mientras para la renta preocupa tanto la cantidad producida como la eficiencia con la que se obtiene —medida por la productividad total de los factores (TFP) propuesta por Solow—, no existe una métrica generalmente aceptada para medir la eficiencia en la obtención del bienestar. Frente a la pregunta tradicional de qué países disfrutan de los niveles más elevados de bienestar, la literatura reciente se pregunta cuánto podrían aumentar el bienestar de sus ciudadanos si utilizaran los recursos de forma más eficiente.

Simon Kuznets formuló por primera vez, en 1934, el concepto de PIB como la cantidad de bienes y servicios producidos por una economía en un periodo de tiempo. En la actualidad, la metodología que fundamenta el Sistema de Cuentas Nacionales, y, por tanto, la medición del PIB y la renta, está bien asentada —aunque no exenta de problemas—, mientras que el concepto, y, por tanto, medición, del bienestar está sujeto a distintas interpretaciones.

En general, se distingue entre medidas objetivas y subjetivas de bienestar. Las primeras descansan en un número de variables entre las que se encuentran, además de la renta *per capita,* otros indicadores relativos al mercado de trabajo, la salud, la desigualdad, la vivienda, la educación, la integración social, la seguridad... Para lidiar con la gran diversidad de potenciales variables se utilizan índices sintéticos construidos mediante la agregación de indicadores simples. El más conocido es el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, que combina renta, salud y educación.

Debería invertirse más en salud porque ayuda a un uso más eficiente de los factores de los que depende el bienestar

Recientemente ha crecido el interés por indicadores subjetivos de bienestar. Estos buscan conocer lo satisfechos que están los individuos con la vida y se obtienen a partir de encuestas en las que el rango de respuestas está acotado entre 0 (muy insatisfecho) a 10 (muy satisfecho). El indicador subjetivo más conocido es el índice global de felicidad de Naciones Unidas. El proporcionado por la OCDE en *How is Life?* combina ambos tipos de indicadores. Para responder a la pregunta de cómo medir la eficiencia en la generación de bienestar, Legge y Smith (2022) aplican una versión modificada de la TFP en la que el índice de satisfacción sustituye al PIB y en la que los *inputs* son cuatro tipos de capital: productivo, humano, social y natural. Ello les permite calcular una medida equivalente, pero en términos de bienestar, a la que por paralelismo con la propuesta por Solow denominan TWP (productividad total del bienestar).

Por su parte, Sarraceno y O'Connor (2022) abordan el problema haciendo uso del índice global de felicidad y sus seis componentes —renta *per capita,* esperanza de vida con buena salud, apoyo social, libertad de elección, ausencia de corrupción y generosidad— para 126 países. Algunos resultados de interés son los siguientes. En primer lugar, niveles elevados de sus componentes no implican necesariamente niveles elevados de bienestar, ya que importan tanto la cantidad como su utilización eficiente. En segundo lugar, países —como los nórdicos— que tradicionalmente aparecen destacados en las clasificaciones de bienestar no son necesariamente los más eficientes. De acuerdo con sus resultados, los cinco países más eficientes son Finlandia, Suiza, Israel, Costa Rica y Bélgica. España ocupa una posición decepcionante, la 74ª. En tercer lugar, el análisis econométrico indica que las variables que tienen un impacto mayor sobre el bienestar son la esperanza de vida con buena salud, la renta *per capita* y el apoyo social, pero especialmente la primera. Si se tiene en cuenta que las poblaciones con vidas más saludables son también las que mejor explotan los recursos de que disponen, la conclusión es clara: debería invertirse más en salud no solo porque afecta positivamente al bienestar subjetivo de la población, sino también porque contribuye a un uso más eficiente de los factores de los que el bienestar depende.

Matilde Mas, Universitat de València e Ivie.

FINANCIACIÓN

PABLO MAÑUECO Y MIGUEL ÁNGEL DÍAZ

Capital paciente

Para garantizar un crecimiento solvente a largo plazo sería recomendable fortalecer el capital del tejido empresarial español, especialmente de las compañías de menor dimensión, y reducir así su dependencia de la financiación externa, fundamentalmente bancaria. La principal solución para afrontar las tensiones a las que se vieron abocadas la mayoría de las empresas con la crisis de la covid fue la puesta en práctica de avales públicos en la financiación bancaria, a través del ICO.

Esta medida, que sin duda contribuyó a canalizar liquidez a las empresas, supuso un aumento de sus niveles de apalancamiento. El vencimiento de las carencias de esos préstamos, unido a la importante subida de los tipos, está empezando a afectar a numerosas empresas, que están iniciando procesos de refinanciación de su deuda bancaria, incluyendo los créditos ICO. Aunque estas operaciones son sin duda necesarias para acompasar los flujos operativos al servicio de la deuda y garantizar la solvencia de bastantes empresas, no pasa de ser otra solución provisional al problema endémico de déficit de capital en el sector empresarial.

Desde el ángulo público y privado es necesario pensar en instrumentos de capital que canalicen recursos a las empresas y que, además, lo hagan con una vocación de mayor permanencia temporal en el accionariado. Hay iniciativas recientes que abogan por este capital más paciente, como las acciones de lealtad, que, bien empleadas, buscan permitir a empresas cotizadas otorgar mayor capacidad de voto a los accionistas que lleven más tiempo en el capital, estableciéndose en dos años el periodo mínimo. También en el sector del capital riesgo, inversor creciente en el tejido empresarial, están empezando a extenderse los denominados fondos secundarios o de continuidad, que permiten alargar el periodo de inversión en las empresas, o incluso vehículos sin un periodo predeterminado de desinversión. Los mercados alternativos también deben ser un canal en el que los inversores empiecen a confiar con una vocación de largo plazo, debiendo fortalecerse los incentivos a la inversión institucional.

En este contexto, la adenda al Plan de Recuperación que están terminando de negociar las autoridades europeas con las españolas para el despliegue del siguiente paquete de fondos europeos constituye una oportunidad para reforzar los instrumentos de capital a disposición de las empresas. Sería deseable que una parte relevante de los nuevos fondos se materializaran a través de mecanismos que permitan reforzar los recursos propios de las compañías y que, adicionalmente, contribuyan a canalizar inversión privada. Tratando además de incentivar su permanencia en el capital durante un mayor plazo de tiempo, lo que sin duda contribuiría a facilitar un crecimiento más sostenible de las empresas y de la economía en su conjunto.

Pablo Mañueco y Miguel Ángel Díaz son profesores de Afi Escuela.

El envejecimiento empuja a los países a aumentar la edad de retiro. Los sistemas de pensiones son muy diferentes, pero todos comparten el reto de ser sostenibles

Europa discute cómo jubilar a sus ciudadanos

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO, **Madrid**

La demografía condiciona los grandes debates en Europa. La creciente esperanza de vida en la UE (77,6 años en 2001 y 80,1 en 2021) y la menguada natalidad (1,57 nacimientos de media por mujer en 2010, frente a los 1,5 de 2020) son factores claves al analizar la falta de mano de obra en algunos sectores o los cambios de consumo. Pero, quizá, el asunto más afectado por esta pinza demográfica sean las pensiones. Los mayores de 65 años representaban en 2019 el 20,4% de la población de la UE, y la Comisión Europea estima que en 2050 serán el 29,6%. Ante estas cifras, el debate lleva varios años instalado en Europa, pero en los últimos meses ha aumentando los decibelios.

El epicentro de la discusión se ha instalado en Francia, donde el Gobierno plantea una subida de la edad de retiro de 62 a 64 años. La propuesta está encontrando mucha contestación política y en la calle de un país que durante décadas ha sido el paradigma de la jubilación temprana. Con menor trifulca, también se discute en España: el Gobierno negocia la última fase de los cambios comprometidos con la UE.

Pero la reforma de las pensiones empezó hace años, coincidiendo en varios países con la Gran Recesión. "En Europa, en la crisis anterior, incrementar la edad de jubilación fue un objetivo claro. La norma más extendida es ir hacia los 67 años", explica Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. Coincide en este análisis Carlos García de Cortázar y Nebreda, vicepresidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social y especializado en la reforma de las pensiones en Europa: "Todos los países europeos incrementaron o están incrementando la edad de jubilación. Hay una convergencia silente, es una carrera", añade García.

Vigilancia de la UE

Cada Estado corre por su cuenta, ya que la UE no tiene competencias sobre los sistemas de los países. Sí vigila que las cuentas cuadren, y condiciona fondos a ciertas reformas. "Los sistemas son distintos, ni mejores ni peores. Y la migración de un sistema a otro es muy compleja, con costes de transición enormes", explica Bravo. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social lanzan un mensaje parecido: "Como cada país tiene tradiciones muy diferentes, avanzar en una política común probablemente sería muy disruptivo y muy contestado. Lo importante es trabajar para que estos sistemas coexistan".

También hay diferencias en la edad efectiva de retiro, en el periodo de cómputo, en los años cotizados que exige cada país o en los ajustes automáticos de cada sistema, como señala Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research: "De los 27 países que integran la UE, 14 aplican mecanismos en los que la cuantía inicial de la pensión está vinculada a la esperanza de vida, al igual que la edad de jubilación y la revalorización de la variables demográficas o económicas". Saca estas conclusiones a partir de un estudio que desarrolló en 2022*: Los sistemas de pensiones de reparto en el contexto demográfico actual: España y la UE.*

Ese crisol organizativo desemboca en niveles de cobertura dispares e impactos diferentes en las cuentas. España gastó en 2019 un 12,7% de su PIB en pensiones, en línea con la media de la UE ponderada por PIB y dos puntos por encima de la media simple, del 10,4%, según el reciente informe del Banco de España *El gasto en pensiones en España en comparativa europea*. Hay países que gastan más, como Grecia (16,1%) o Italia (15,9%), mientras que a la cola está Irlanda (5%). "En lo que se refiere al número de beneficiarios del sistema de pensiones, España presenta niveles sustancialmente más bajos que el resto de los países de la UE, con las excepciones de Grecia y Malta, lo que produce una presión a la baja considerable sobre el gasto en pensiones", indica el estudio. Esto se debe, según los expertos, a que España exige más años cotizados que otros para acceder a una jubilación completa. Por ello, aunque sea el tercer país de la UE con menor diferencia entre el salario y la pensión media (por detrás de Italia y Grecia), la presión del sistema sobre las cuentas es menor que en otros. Otro problema estructural de España, además del alto nivel de desempleo, es la expulsión endémica de trabajadores del mercado a partir de los 55.

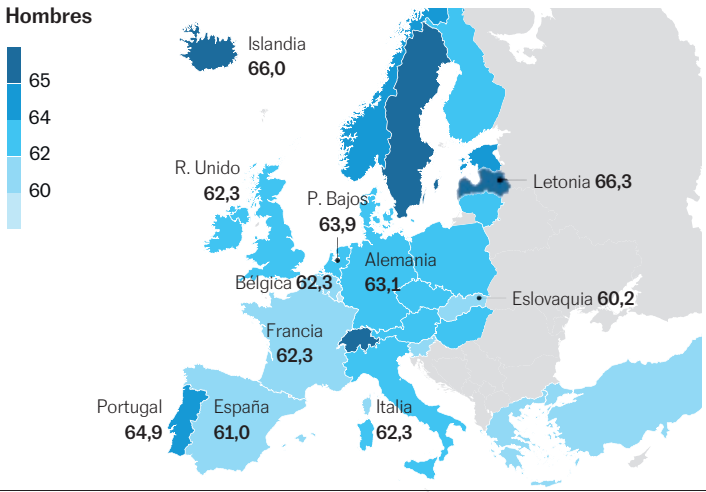
El Gobierno se encuentra en la fase final de la negociación sobre la nueva reforma. El Ejecutivo propone pasar de los 25 años actuales a 30, pudiendo descartar los dos de menor cotización. Fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá justifican su propuesta: "La idea es que en el

Edad legal de jubilación por países

	Edad actual	Edad cuando se complete la reforma
Italia	67 años	-
Países Bajos	66 años y 7 meses	67 en 2024
Portugal	66 años y 4 meses	Puede cambiar según la esperanza de vida
Reino Unido	66 años	-
España	65 años*	65 años a partir de 2027 *
Alemania	65 años y 10 meses	67 años en 2031
Bélgica	65 años	66 desde 2025 y 67 desde 2030
Francia	62 años	-

* En España, 65 años con al menos 37 años y 6 meses cotizados, con menos 66 años y 2 meses. A partir de la reforma, con 38 años y 6 meses cotizados; con menos a los 67 desde 2027.

Edad efectiva de acceso a la jubilación



Fuente: Centro de Relaciones Europeas e Internacionales de Seg. Social, OCDE y Banco de España.

La reforma francesa abre un debate sobre la justicia social

Macron está dispuesto a subir la edad de jubilación a los 64 años

MARC BASSETS, **París**

Cuando en Francia se habla de reformar las pensiones, no se habla solo de las pensiones. Se ve estos días con los centenares de miles de franceses que salen a la calle para protestar contra el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. La cuestión nunca es únicamente económica y demográfica, nunca se limita a debatir cómo financiar las jubilaciones en una sociedad que envejece y en las que la esperanza de vida aumenta. Porque en Francia, cuando se habla de reformar las pensiones, se habla también de justicia social, de la calidad del trabajo, del derecho al descanso (y hasta a la pereza).

Al anunciar, a principios de enero, un plan para aumentar la edad de jubilación a los 64 años en 2030, el Gobierno abrió la caja de los truenos. El proyecto de ley contempla también adelantar a 2027 la obligación de haber cotizado 43 años para cobrar la pensión plena, medida inicialmente prevista para 2035.

Ya se han celebrado cuatro jornadas de manifestaciones masivas, la última ayer, y hay más previstas. Ayer salieron a las calles de ciudades y pueblos 963.000 personas, según el ministerio de Interior, y 2,5 millones, según el sindicato CGT. Siete de cada diez franceses se oponen a la reforma.

En la Asamblea Nacional, los partidarios del presidente Macron carecen de una mayoría para adoptarla. Pero confían en que la derecha moderada de Los Republicanos, históricamente partidaria de esta reforma, vote a fa-

cálculo de la pensión se refleje de forma fidedigna y equitativa la evolución de las carreras de las personas. La mayoría de los países europeos han considerado que esto se hace bien haciendo coincidir el periodo de cómputo con toda la carrera profesional. Nosotros creemos que lo razonable es que la regla de periodo de cómputo se modernice para adecuarse a una realidad laboral diferente a la del pasado, con carreras menos lineales". Los esfuerzos se centran en conseguir más ingresos para garantizar la sostenibilidad, después de haber aumentado un 8,5% las pensiones para compensar la inflación. Es el objetivo del aumento de las bases máximas que se está negociando y de la reforma de las cuotas de autónomos, entre otros.

A continuación se detalla brevemente cómo funciona el sistema en otros países europeos:

Alemania. El país está en pleno proceso de elevar la edad de jubilación de los 65 años hasta los 67, que deberán cumplir los nacidos después de 1964. Actualmente, los trabajadores empiezan a cobrar la pensión a los 65 años y 10 meses, aunque hay distintas excepciones y es posible jubilarse antes asumiendo deducciones (3,6% anual: alguien que debería jubilarse a los 67 pero lo hace a los 64 pierde el 14,4%), a partir de los 63 años y si se han cotizado un mínimo de 35. También es posible jubilarse después. Por cada año extra las prestaciones se incrementan un 6%. La cuantía se calcula mediante un sistema de puntos en función de los años trabajados, la edad y los ingresos medios. La pensión media en 2022 fue de 1.467 euros.

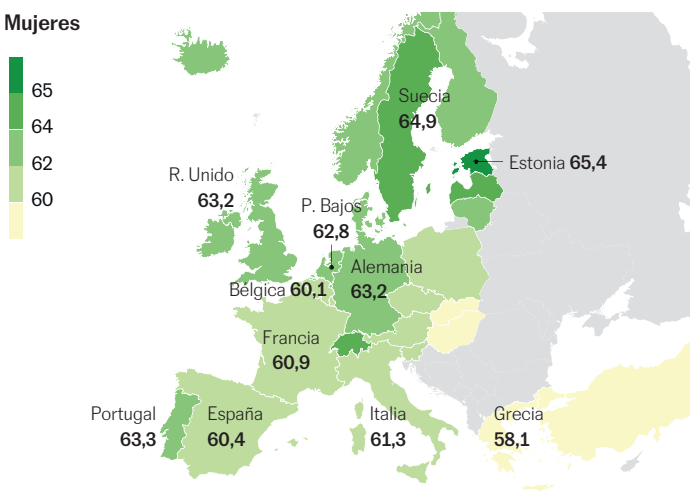
Italia. La reforma de la ley de pensiones ha estado encima de la mesa de todos los últimos gobiernos, que han jugado electoralmente con la edad de jubilación. La que pretendía llevar a cabo el de Giorgia Meloni no se ha podido ejecutar de forma completa. En la última ley de Presupuestos se introdujo la llamada cuota 103, una cifra que se obtiene de sumar los dos números que permiten la jubilación más temprana: 41 años de cotización y 62 años de edad. Sin embargo, el Ejecutivo pretende eliminar en 2024 la edad mínima para recibir la pensión y fijar solo el baremo de los años cotizados. El modelo estaría dedicado a los trabajadores que comenzaron su historia laboral antes de los 18. Las pensiones más bajas se sitúan actualmente en 571,63 euros, y el máximo está en 2.815.

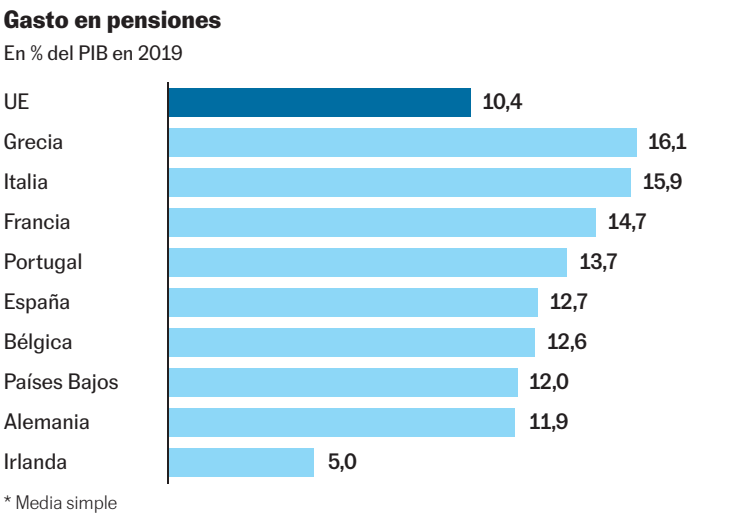
El Reino Unido. Su sistema arrastra desde hace años la fama de ser el menos generoso de Europa. La explicación reside en la prevalencia otorgada a los fondos privados de pensiones, y en el hecho de que el llamado State Pension System (Sistema de Pensiones del Estado) aporta a todos los ciudadanos la misma cantidad respecto a los años cotizados (al margen del salario). La suma máxima sería de unos 940 euros, y para ello el trabajador deberá haber cotizado 35 años. No podrá empezar a cobrar hasta cumplir los 66. El mínimo que se puede comenzar a cobrar es de casi 230 euros, y requiere haber trabajado un mínimo de 10 años. La mayoría de los trabajadores lo complementan con un fondo privado de pensiones.

Alemania está en proceso de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años

En España, los esfuerzos se centran en conseguir más ingresos

Miles de franceses protestaron ayer contra la reforma de las pensiones en ciudades como Toulouse (izquierda) y París. / AFP / REUTERS





EL PAÍS

vor, sin dar nada por seguro. El argumento del Gobierno es triple. Primero, económico: la primera ministra, Élisabeth Borne, alertó que, sin la reforma, el déficit suplementario del sistema de pensiones se elevaría a 100.000 millones en la próxima década. Segundo, demográfico: en los setenta cotizaban tres trabajadores en activo por cada jubilado; en el 2000, dos; ahora, 1,7; en 2040 serán 1,5. Y tercero: político. Macron prometió subir la edad de jubilación en la campaña que le llevó a la reelección en 2022.

Los detractores —sindicatos, izquierda, extrema derecha— replican, a los argumentos económico y demográfico, que la urgencia es falsa. En 2021 y 2022 hubo un excedente en el sistema de pensiones. Algunos economistas señalan que los déficits previstos para los próximos años están lejos de ser alarmantes y que el país podría tomarse más tiempo para reforma el sistema de manera consensuada. Otros deslizan la sospecha de que Macron no reforma las pensiones por ninguna otra necesidad que la de cumplir con los criterios de déficit y deuda de la UE: culpa de Bruselas.

Pero el argumento que más ha calado es otro: el de la justicia social. Al obligar a los franceses a trabajar dos años más, quienes más lo notarán será quienes empezaron más jóvenes, que suelen tener trabajos más precarios y físicos. Otras perjudicadas serán las mujeres con carreras interrumpidas por bajas de maternidad y periodos de inactividad, aunque gran parte de este problema ya existe fruto de las desigualdades en el mercado laboral. Otro punto débil: los mayores de 60, que ya tienen dificultades para encontrar trabajo o pierden el que tenían. Se hace difícil pensar cómo trabajarán más si no encuentran empleo a esa edad.

El Gobierno no niega que haya alternativas, como subir impuestos, reducir el nivel de las pensiones o un mayor endeudamiento. Pero cree que sería un error. Francia es el país de la OCDE con mayor gasto social y el tercero en gasto en pensiones. Con Macron, el gasto no se ha reducido, y con la covid y las medidas antiinflación más bien ha ocurrido lo contrario: la economía se ha socializado más.

Pero al presidente se le reprocha que haya reducido los impuestos para los más ricos con la supresión parcial del impuesto sobre la fortuna y que mantenga como un dogma la negativa general a subir impuestos. Las pensiones, en Francia, son solo una parte del problema.

Portugal. La edad de jubilación cambia cada año. Esta modificación se adoptó en 2014, cuando se vinculó a la evolución de la esperanza media de vida a los 65 años. Esta tendencia, sin embargo, se ha frenado con la alta tasa de mortalidad por la covid. La edad de jubilación se ha rebajado en dos meses respecto a 2022 y se ha fijado en 66 años y cuatro meses para 2023 y 2024. En 2023 las pensiones se han revalorizado en un 4,83%, muy por debajo de la inflación del año anterior, que se situó en el 7,8%. Hay una gran desigualdad entre lo que cobran los jubilados del sector privado y los del público. Mientras que la pensión media fue de 510,63 euros para los primeros, alcanzó los 1.341,94 para los segundos en 2020.

Bélgica. El próximo pago del plan de recuperación depende de la reforma de pensiones, que tiene similitudes con la de España: la edad de jubilación se está retrasando, llegará a 67 años en 2030; el retiro antes de la edad legal se ha endurecido hace poco; y la previsión es que la presión demográfica crezca y ponga en aprietos las cuentas. Para solucionar el problema, el Gobierno de coalición del liberal Alexander de Croo, acordó con Bruselas una reforma del primer pilar de su sistema de pensiones, es decir, la correspondiente a las prestaciones públicas. El objetivo explícito es asegurar la sostenibilidad. En 2024 la pensión mínima será de 1.500 euros para aquellos que tengan una carrera completa de cotización, un total de 45 años

Países Bajos. En 2023, la edad de la jubilación empezará a contar a partir de los 66 años y 10 meses. Desde 2024, y de forma gradual hasta 2025, aumentará hasta los 67. La nueva, cuya entrada en vigor está prevista en julio, modifica la gestión de los fondos colectivos de pensiones, de manera que, cada persona tendrá su propia hucha, que dependerá de sus contribuciones y las fluctuaciones del mercado de valores. Remitida por el Banco de Seguros Sociales (SVB, en sus siglas neerlandesas), la pensión básica estatal equivale al 70% del salario mínimo bruto, que está cifrado en 1.934 euros a partir del 1 de enero de 2023 (antes eran 1.756 euros, desde los 21 años).

Con información de **Elena G. Sevillano** (Alemania), **Daniel Verdú** (Italia), **Rafa de Miguel** (Reino Unido), **Tereixa Constenla** (Portugal), **Manuel V. Gómez** (Bélgica) e **Isabel Ferrer** (Países Bajos).